

Entre la diversidad y la incertidumbre. La economía de América Latina y el Caribe en los 90

Fuentes-K, Juan A.

Juan Alberto Fuentes K.: Economista guatemalteco. Doctor en Economía por la Universidad de Sussex (Inglaterra). Actualmente es funcionario de la CEPAL, desempeñándose como asistente especial del secretario ejecutivo del organismo internacional.

En la década de los 90 es probable que los países de América Latina y el Caribe enfrenten dos tendencias aparentemente contrarias: por una parte, una creciente integración a la economía mundial, asociada al proceso de apertura y liberalización que actualmente predomina en la región como parte de una creciente convergencia de políticas económicas; y, por otra, grandes divergencias en el desempeño económico de los países como consecuencia de distintos ritmos de ajuste e inversión y debido a una competencia internacional que agudiza sus diferencias

La tendencia hacia una mayor apertura y liberalización de mercados es parte de un creciente consenso en torno a varios componentes básicos de la política económica que se observa no sólo en América Latina sino en el mundo entero. Una manifestación concreta de esta coincidencia es la aprobación de la última Estrategia Internacional de Desarrollo para la presente década donde, a diferencia de ocasiones anteriores, se logró un notable consenso entre gobiernos de países desarrollados y de países en desarrollo, que incluyó un mayor énfasis en la necesidad de esfuerzos internos de estabilización y ajuste, así como un reconocimiento de la importancia de las fuerzas del mercado. En este resultado indudablemente influyó la experiencia de América Latina y el Caribe durante la década de los 80, caracterizada no sólo como «década perdida» sino también como período de dolorosas enseñanzas que, además de tomar en cuenta los avances de la democracia en la región, reconoce la existencia de logros y lecciones importantes en el área económica¹.

¹CEPAL: Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990.

La convergencia de políticas

Este consenso pareciera incluir un reconocimiento de que una gestión macroeconómica estable y coherente es vital para crecer, y que requiere un control de la demanda agregada y la existencia de precios relativos que no discriminen en contra de los bienes y servicios exportables o importables. Lo anterior supone una política monetaria prudente y un déficit fiscal reducido o inexistente, y reconoce los grandes peligros y daños causados por una moneda sobrevaluada. El consenso también incluiría la necesidad de contar con sistemas de protección muy bajos (aranceles de 10% o menos) o moderados (aranceles de menos de 30%) que no sólo aseguren cierta eficiencia mínima de la producción nacional derivada de la competencia de las importaciones, sino que en términos más generales abran el país a estímulos, exigencias de calidad, sinergismos e insumos tecnológicos que contribuyan a su competitividad internacional.

La prioridad asignada a lograr una mayor competitividad internacional también se estaría manifestando en la atención otorgada al desarrollo del capital humano mediante mayor capacitación y educación, además de asegurar condiciones de salud adecuadas. Finalmente, se estaría reconociendo la necesidad de alterar la relación entre agentes públicos y privados tendiente a sustituir la confrontación por la colaboración y a aumentar la eficiencia de ambos. Ante la crisis financiera del sector público, esta mayor eficiencia normalmente implicaría una concentración de sus actividades en un número más reducido de áreas o sectores que en el pasado, o el uso de instrumentos diferentes de supervisión y regulación, lo cual a menudo conllevaría privatizar algunas empresas públicas.

El consenso no es total, y existen diversas polémicas sobre el ritmo en que puedan aplicarse diversos instrumentos de política, o sobre su combinación más adecuada. Aun en estos casos, sin embargo, tiende a predominar un pragmatismo muy alejado de la polarización conceptual cargada de divergencias de origen ideológico que caracterizó a la década de los 60 y 70. Lo anterior no implica ausencia de conflictos, que en la década de los 90 pueden incluso agudizarse en torno a temas como el de la equidad, pero sí apuntan al predominio de un pensamiento económico más abierto, factible de ser modificado ante lecciones que a menudo pueden ser muy dolorosas. Una de estas lecciones, por ejemplo, es que un proceso exitoso de estabilización y ajuste con inversión, al tiempo que se preserva la democracia, requiere de un esfuerzo persistente que puede tomar varios años, debiéndose enmarcar dentro de una estrategia coherente de largo plazo que cuente con credibilidad, apo-

yo social - que puede manifestarse en la constitución de un "pacto" - y cooperación financiera internacional.

La acumulación restringida de capital

Los rezagos económicos y sociales existentes y el aumento de la población latinoamericana y del Caribe en casi 90 millones de personas entre 1990 y el año 2000, aunado a más de 180 millones de personas en estado de pobreza a fines de la década de los 80, implica exigencias financieras y distributivas que cuestan imaginar. Así, el desafío de los 90 no es sólo alcanzar niveles de inversión que permitan el crecimiento futuro sino también compensar los procesos de desinversión de la «década perdida», cuando la relación entre inversión y el producto interno de la región cayó de 24% en 1980 a alrededor del 16% en 1989. Se trata no sólo de la inversión privada en facilidades productivas, con un creciente componente tecnológico ante los imperativos de la competencia internacional, sino también de la inversión pública y privada requerida para atender el problema de la equidad y el desarrollo social, todo ello aunado a una fuga de recursos como consecuencia del pago de la deuda. El monto de la transferencia anual desde que se desencadenó la crisis de la deuda en 1982 ha representado el 3.5% del producto regional anualmente, en contraste con una contribución positiva previa a la crisis que equivalía a alrededor del 2.5% del producto, lo cual implica un vuelco de 6 puntos porcentuales, similar a la reducción del coeficiente de inversión.

Al reconocer que la inversión extranjera sólo puede ser un complemento del ahorro y de la inversión local, resultan claros los obstáculos a la generación de ahorro interno: el consumo de las grandes mayorías ya está por debajo o levemente encima de los niveles correspondientes a un estado de pobreza, y ante la apertura y la liberalización es difícil fomentar la austeridad en grupos medios y altos que tienen patrones de consumo equivalentes al de los países industrializados. Así, la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento, incluyendo el ahorro institucional derivado de fondos de previsión y el ahorro del sector público, junto con la resolución del problema de la deuda externa, continuarán siendo un tema vital de atención en los 90.

a) La deuda externa.

La deuda externa ha sido uno de los condicionantes fundamentales de la capacidad de invertir en América Latina y el Caribe: la transferencia de recursos al exterior ha reducido los recursos financieros disponibles y contribuido a la incertidumbre y a los desequilibrios fiscales y de balance de pagos. Los países con una pro-

porción importante de su deuda que corresponde a deuda con la banca comercial, y que ya han llegado a acuerdos en torno al pago de esta deuda, se convierten así en candidatos para pertenecer al grupo privilegiado de países que podrían retomar la senda del crecimiento en los 90. Estos países incluyen a Chile, Costa Rica, México, Venezuela y Uruguay. Hasta el momento una o varias condiciones especiales han permitido que el problema de la deuda con la banca comercial haya sido parcialmente superado: los países correspondientes tienen una importancia estratégica para Estados Unidos; tienen abundancia de recursos naturales controlados por el Estado, lo cual le permite obtener recursos fiscales, dar mayores garantías y facilitar ajustes que de otro modo hubieran sido casi imposibles; o tienen un tamaño pequeño y una incidencia marginal en el sistema financiero internacional que, acompañado de técnicas apropiadas y en ocasiones audaces de negociación, no afectan a la banca de manera importante.

Por otra parte, existen perspectivas favorables en relación con la deuda bilateral con gobiernos de países desarrollados. La Iniciativa de las Américas impulsada por el Presidente de Estados Unidos permite prever una reducción de la deuda bilateral con el gobierno de Estados Unidos, y el acuerdo reciente con Polonia, que elimina el 50% de su deuda bilateral, establece un precedente que presionará a los gobiernos europeos y del Japón a aplicar este mismo tratamiento a otros países en desarrollo.

Sin embargo, la deuda con instituciones multilaterales ha ido en aumento, sin perspectivas de renegociaciones. En 1990, cuatro países de la región tenían atrasos en el pago de su deuda con el FMI, cinco con el Banco Mundial y siete con el BID. Así, sin que deje de existir el problema de la deuda con la banca comercial en los 90, es probable que su perfil baje en contraste con un mayor perfil de la deuda con las instituciones multilaterales. En 1990 Guyana y Honduras fueron favorecidos por grupos de apoyo conformados por diversos gobiernos que les facilitaron préstamos «puente» para ponerse al día en sus pagos con los organismos multilaterales y que a su vez les permitió tener acceso al crédito de estos organismos, liberando recursos para pagar los préstamos iniciales otorgados por los grupos de apoyo. A partir de lo anterior surge la interrogante de si sería posible constituir mecanismos más estables y transparentes que con la cooperación de países desarrollados evitaran que se diera la acumulación de atrasos o, aún más, dieran lugar a arreglos indirectos que equivalieran a renegociaciones.

b) Estabilidad e inversión.

Puede esperarse un repunte de la inversión privada en la medida que se combinen la estabilidad política y macroeconómica con reglas de propiedad claras y estables, infraestructura física e institucional adecuada, y acceso a mercados dinámicos. La esencia impredecible de una democracia no permite hacer proyecciones sobre el desarrollo político de la región, si bien en la actualidad la extensión de la democracia pareciera coincidir con un menor margen para cambios políticos radicales que cuestionen el régimen de propiedad privada, lo cual contribuiría a un aumento de la inversión privada.

Los objetivos de alcanzar la estabilización macroeconómica y de avanzar por la vía de la liberalización de mercados y la privatización, así como la creciente convicción de que se requieren mecanismos internacionales para garantizar inversiones extranjeras y para resolver controversias, también apuntarían a condiciones favorables a la inversión extranjera, si bien los diferentes ritmos de avance en materia de estabilización y ajuste implicarían condiciones muy variadas de país a país. Sin embargo, aun con economías estabilizadas pero con condiciones de crédito muy restrictivas, o en ausencia de inversión pública complementaria, particularmente en casos de infraestructura deteriorada, puede mantenerse un ritmo de inversión privada muy reducido, con las consiguientes tasas mínimas de crecimiento del producto.

Lo anterior implica que los países que más han avanzado en relación con el problema de la deuda nuevamente tenderían a ser los países con mayores posibilidades no sólo de inversión nacional sino también de inversión extranjera, con lo que la distancia entre los países más exitosos y los más rezagados correría el riesgo de ahondarse aún más. Y si bien es cierto que en muchos países contrasta por el momento la liberalización de condiciones de ingreso de inversión extranjera con el flujo real de capitales, en Chile y México no sólo se ha producido un ingreso importante de inversión extranjera directa sino que además ambos países han vuelto a tener acceso a créditos voluntarios del mercado internacional de capitales.

La integración hemisférica y regional

Congruente con la nueva orientación de la política económica en la región, puede esperarse un aumento de la inversión dirigida a la exportación y no a mercados internos cuyo crecimiento se estaría controlando cuidadosamente para evitar desequilibrios macroeconómicos o para prevenir una erosión de la competitividad debido a salarios excesivamente altos. Las disponibilidades de recursos naturales, de

mano de obra (calificada o no) de relativo bajo costo, infraestructura técnica y física adecuada y acceso seguro a mercados externos sería determinante. En este contexto el acuerdo entre México y los Estados Unidos y la Iniciativa para las Américas pueden verse como arreglos dirigidos no sólo a liberalizar el comercio sino también a promover la inversión, junto con regulaciones más estrictas de propiedad intelectual que le permitan a la inversión extranjera combinar la explotación de sus activos tecnológicos con el aprovechamiento de los recursos de cada país.

Lo que en términos muy restrictivos puede verse como una respuesta comercial a la constitución de un bloque comercial discriminatorio en Europa pareciera en realidad una respuesta más amplia conducente a aumentar la competitividad internacional de Estados Unidos con base en un espacio comercial, financiero y tecnológico ampliado. Le corresponderá a los países de América Latina y el Caribe definir posiciones congruentes con el alcance de objetivos similares por parte de la región. Le corresponderá también evaluar hasta qué punto tendrá que sacrificar un enfoque multilateral de las relaciones económicas por uno regional, o cómo éste último podría condicionar sus relaciones con regiones y países de otros continentes.

La orientación de la integración regional latinoamericana pareciera ser crecientemente susceptible al tipo de arreglos comerciales y de inversión que los países de la región puedan acordar con Estados Unidos. Por una parte, el gobierno de Estados Unidos ya ha declarado claramente que prefiere negociaciones con grupos de países y no con países individuales, no sólo por el pesado proceso burocrático que lo último implicaría sino también porque desea favorecer a sus empresas con posibilidades de acceso a mercados ampliados y no segmentados. Por otra parte, el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) ya constituye un esfuerzo formal por negociar en forma conjunta con Estados Unidos y se vislumbran acuerdos similares con otros grupos, incluyendo a los países miembros del Pacto Andino, del Mercado Común Centroamericano y de la Comunidad del Caribe. Estos esfuerzos, y los atrasos y dificultades que pueden preverse ante la experiencia de la negociación del acuerdo entre México y Estados Unidos, que ha conducido a movilizar en éste último a una alianza proteccionista de grupos laborales, ambientalistas y agrícolas, así como de empresarios en el sector de textiles, estaría apuntando - no obstante la aprobación del procedimiento de autorización legislativa por la "vía rápida" - a un proceso de integración interamericana de mediano plazo y a la integración intralatinamericana como paso previo.

En relación con esta integración previa cabe preguntarse si después de haber pasado inicialmente por una etapa voluntarista y en ocasiones rígida, basada en la sus-

titución de importaciones a nivel regional, y posteriormente por una etapa revisionista y excesivamente flexible en la década de los ochenta, será posible que América Latina ingrese a una nueva etapa de integración más pragmática y de mayores logros reales². Una mayor convergencia en materia de política económica y de democracia puede contribuir a lo último. La existencia de desequilibrios macroeconómicos dificulta la integración en un primer momento, y este problema no puede ignorarse: lograr la estabilización previa no sólo es necesaria para facilitar un flujo más o menos regular de comercio, sin grandes fluctuaciones cambiarias, sino que también implica mayor credibilidad y posibilidad real de cumplir con los compromisos de la integración. Por otra parte, los procesos de apertura comercial deberían facilitar la expansión del comercio intrarregional, pudiendo preverse que las preferencias arancelarias verán su papel como instrumento de integración reducido a la vez que adquieren mayor relieve otros obstáculos al comercio, por causa de las comunicaciones y de los costos de transporte. Además de la negociación conjunta ante los Estados Unidos y otros socios comerciales, también puede preverse un aumento de las acciones sectoriales conjuntas dirigidas a mejorar la competitividad internacional de la región, particularmente en materia de investigación y desarrollo tecnológico, donde la importancia de las economías de escala y de los sinergismos surgidos de la cercanía entre agentes económicos va en aumento.

Surge cierta incertidumbre en torno a las perspectivas de la integración, sin embargo, como consecuencia de la dinámica de competencia entre países impuesta por la nueva inserción en la economía mundial, y debido a que no siempre parece reconocerse que la integración también tiene costos, tanto de transición hacia el establecimiento de mercados más competitivos, como de aportes fiscales de los gobiernos requeridos para ejecutar proyectos conjuntos y para constituir y mantener una estructura institucional que le dé seguimiento a los acuerdos de integración. En este sentido, la integración regional se vería favorecida por un mayor realismo, análogo al que se ha adquirido en materia de estabilización y ajuste.

Más allá del capital natural

Durante la década de los 80 la preocupación por el medio ambiente parecía en ocasiones ser parte de una condicionalidad externa ampliada, sin asidero en las prioridades de desarrollo en América Latina y el Caribe. En la década de los 90 todo apunta a que la propia región la ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda de desarrollo.

²Gert Rosenthal: «Treinta años de integración en América Latina: un examen crítico» en Nueva Sociedad No. 113, 5-6/ 1991. (Trabajo presentado en ocasión del décimo aniversario de la ALADI, Montevideo, agosto de 1990).

No se trata, sin embargo, de un enfoque conservacionista, centrado en la preservación de los recursos naturales o del capital natural. La CEPAL ha propuesto un enfoque basado en la acumulación de capital, pero reconociendo que existen diferentes componentes y que el crecimiento sustentable requiere equilibrar el ritmo de acumulación de cada componente de capital, incluyendo el capital financiero, el capital físico (infraestructura y equipo), el capital humano, el capital natural, el capital cultural y el acervo institucional (los sistemas de decisiones)³. En el pasado los enfoques tradicionales de la teoría del crecimiento suponían escasez de capital físico y financiero y abundancia de las otras formas de capital conduciendo, en la práctica, a un proceso desequilibrado e insostenible de acumulación que se ha reflejado, por ejemplo, en la erosión de la tierra y en proyectos de inversión como embalses cuya vida útil se acortaba por la acumulación de sedimentos. En el futuro se trataría, por lo tanto, de alcanzar la composición óptima de la acumulación, de manera que cada forma de capital no exceda su propia tasa de reproducción, tomando en cuenta las relaciones de sustitución (normalmente limitadas no obstante el progreso técnico) o de complementariedad que puedan existir entre ellas.

Las políticas de inversión tendrían que fomentar el equilibrio entre distintas formas de capital mediante el uso de diversos instrumentos. La «Plataforma de Tlatelolco», adoptada por los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en México en marzo de 1991 como insumo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tendrá lugar en el Brasil en 1992, apunta a no basar la política ambiental solamente en medidas de control y regulación directa, sino también a complementarlas con políticas e incentivos económicos y financieros que hagan uso de las fuerzas del mercado en vez de sustituirlas. Por otra parte, el tema del medio ambiente abre una inmensa gama de áreas de negociación internacional. Además de los temas propiamente ambientales (atmósfera y clima, biodiversidad, recursos terrestres y marinos, agua dulce, asentamientos humanos y desechos tóxicos) puede preverse como área con un potencial particularmente conflictivo al comercio. Lo demuestra la negociación de México con Estados Unidos en torno a las exportaciones de atún en particular y al acuerdo de libre comercio en general, además de la reintroducción del tema ambiental en la agenda del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) como resultado de una iniciativa de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, encabezados por Austria.

³CEPAL: El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente, Santiago de Chile, 1991.

La equidad

La desigualdad ha sido una característica particular de América Latina y el Caribe durante décadas, y la liberalización de mercados a ultranza amenaza con agudizarla si no se adoptan medidas para evitarlo. Fuerzas económicas que incidan en la demanda de mano de obra evidentemente condicionarán la distribución del ingreso en el futuro: exportaciones que requieren un uso intensivo de recursos naturales o de capital en presencia de amplios contingentes de mano de obra desempleada o subempleada no favorecerán un aumento generalizado de salarios, mientras que aumentos significativos de exportaciones intensivas en mano de obra con una gradual incorporación de progreso técnico pueden contribuir a lograrlo. Son posibles ambos escenarios, así como uno de estancamiento y creciente empleo «informal», pero la creciente desigualdad entre países, con un reducido grupo caracterizado por un desempeño exitoso, reduce el universo de casos que puedan ver su distribución del ingreso mejorada en el futuro cercano. Además, como lo demostraron los estallidos sociales y la violencia en varios países centroamericanos al final de la década de los 70 después de dos décadas de tasas muy altas de crecimiento económico, el éxito en materia de crecimiento puede verse amenazado por la ausencia de equidad y concertación.

En relación con el papel del Estado en torno a la equidad, la existencia de democracias con economías de mercado implica actualmente la ausencia de políticas radicales de redistribución, si bien conlleva una amplia gama de formas de participación social que le da un carácter impredecible a la presión que ejercerán sobre el Estado y al efecto que éste tenga sobre la evolución futura de la equidad, concebida en un sentido amplio⁴. Por una parte, la democracia ha abierto espacios para la lucha por la equidad pero la crisis le ha quitado legitimidad a esta lucha, y la incapacidad de muchos partidos políticos de cumplir con sus promesas electorales los tiende a colocar en una situación insegura y débil, con grandes variaciones del voto popular de elección a elección. A su vez, la informalización y crisis de la economía ha debilitado a los sindicatos como movimientos favorables a la equidad general, y la resistencia a reformas agrarias en el pasado, con consecuencias de desestabilización de la democracia, hacen dudar de su viabilidad, aun por parte de aquellos favorables a la equidad. La homogeneización de aspiraciones de consumo aunada a otros factores también contribuye a generar múltiples tipos de presión social, incluyendo el aumento de la delincuencia y del narcotráfico.

⁴Marshall Wolfe: «The Prospect for Equity», Santiago, marzo de 1991, mimeo.

Por otra parte, cobra viabilidad aparente la equidad en general ante cierto avance de la equidad política como resultado de la democracia lo cual, junto a un mayor pragmatismo y al abandono de utopías radicales, apunta a la posibilidad de avances graduales, sin expectativas de represión o de objetivos de reestructuración global de la sociedad postergados indefinidamente. Fondos de inversión social y políticas de ingresos que son el resultado de «pactos sociales» ameritan destacarse como ejemplos de estos avances. Además, el surgimiento de nuevos movimientos basados en reivindicaciones de género, edad, etnia, preferencias culturales, religión, o preocupados con la degradación ambiental o los derechos humanos, con una cohesión que a menudo es multclasista y que cuentan con importantes contrapartes de apoyo internacional, presenta perspectivas prometedoras en relación con la lucha por la equidad.

El progreso técnico y las divergencias económicas

En contraste con la influencia homogeneizante de un mayor consenso en materia de política económica, surge una creciente competencia internacional que puede profundizar las diferencias entre los países de América Latina y el Caribe. Por una parte, los procesos de apertura y liberalización de los países de América Latina y el Caribe refuerzan la importancia, como determinantes de su competitividad, de sus recursos naturales y su dotación de mano de obra. Comparando extremos, países ricos en recursos naturales requeridos para la industria, como Chile o Venezuela, tendrán perspectivas de exportación diferentes a la de aquellos países del Caribe pobres en este tipo de recursos pero densamente poblados y con recursos atractivos para el turismo, donde la ventaja comparativa se estaría manifestando primordialmente en la exportación de bienes y servicios intensivos en mano de obra.

Pero ante la creciente importancia del progreso técnico como determinante del éxito dentro de una competencia económica internacional cada vez más intensa, donde la reducción del costo del transporte coincide con la incorporación de nuevos y audaces países competidores del sudeste asiático, también aumenta la posibilidad de una ampliación de brechas tecnológicas, no sólo entre países desarrollados y en desarrollo, sino también entre grupos privilegiados de países latinoamericanos y los demás.

Tres características del progreso tecnológico ponen en desventaja a los países más atrasados. Primero, la naturaleza acumulativa del progreso técnico y la existencia de economías de escala en investigación, desarrollo y aprendizaje implican ventajas duraderas para las empresas o conglomerados que primero aplican innovacio-

nes en su campo, y estas ventajas se convierten en auténticas barreras que las nuevas empresas latinoamericanas y caribeñas recién creadas, o en vías de enfrentar la competencia internacional, tienen que superar en el mercado internacional. En segundo lugar, el carácter «sistémico» del progreso técnico implica que éste surge no sólo de la iniciativa y eficiencia de las empresas sino de toda la red de interrelaciones entre empresarios y el sistema educativo, la infraestructura física y tecnológica, las relaciones entre gerentes y obreros, y las relaciones entre sectores públicos y privados, lo cual sitúa en particular desventaja a aquellos países inicialmente menos integrados y con infraestructuras físicas y tecnológicas más débiles. Finalmente, la tecnología de nuevos materiales, la biotecnología y el uso más eficiente de insumos permitido por técnicas de control derivadas de la microelectrónica e informática, amenazan con eliminar las ventajas competitivas derivadas exclusivamente de la mano de obra de bajo costo o de los recursos naturales no procesados, como consecuencia de la automatización y la reducción de la demanda para insumos materiales.

En la medida que los países puedan combinar su dotación de recursos humanos y naturales con un progreso técnico que tienda a aprovechar estos recursos, y que se fortalezca la serie de interrelaciones favorables al desarrollo de una competitividad sistémica y ecológicamente sustentable, es posible que los países puedan evitar quedar por debajo de un umbral cada vez más difícil de superar. Lograda la estabilización macroeconómica, y existiendo un programa de ajuste persistente, creíble y coherente, países con una sólida base industrial como Brasil y México pueden ajustarse con relativa rapidez, aunque no sin costos, a un ambiente nacional e internacional más competitivo. Pero el creciente desdibujamiento de las fronteras entre los sectores primario, secundario y terciario como resultado de nuevas tecnologías en microelectrónica, gestión, informática, nuevos materiales y biotecnología conduce a evitar una identificación demasiado estrecha entre la industrialización, en un sentido estricto, y la aplicación de progreso técnico. Las numerosas experiencias de exportaciones de nuevas variedades de frutas y legumbres de países como Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala, que compiten en los mercados de países industrializados después de haber pasado por la experimentación con nuevas variedades y por el desarrollo de nuevas técnicas de comercialización, son una demostración de la incorporación exitosa de progreso técnico en la agricultura y en servicios de apoyo.

El entorno externo y perspectivas

La estrategia y las políticas económicas que están siendo adoptadas en América Latina y el Caribe implican una apuesta cuyo éxito se basa en una economía internacional relativamente abierta y en expansión. La apuesta evidentemente involucra riesgos, pero se considera que el menor riesgo que eventualmente pudiera estar asociado a posibles alternativas surgiría fundamentalmente de perspectivas de estancamiento.

Existen argumentos para suponer un escenario económico internacional negativo: incluyen el surgimiento de bloques económicos crecientemente discriminatorios, el desarrollo de un mercantilismo tecnológico, el aumento del conflicto en materia económica frente a la ausencia de un manto de seguridad que se consideraba necesario antes del fin de la guerra fría, y la intensificación del narcotráfico y la creciente falta de control gubernamental de la economía a nivel interno y externo. Sin embargo, tampoco se excluye el surgimiento de un mundo de posguerra unipolar, las proyecciones de crecimiento de los países miembros de la OECD en la década de los 90 son positivas, las negociaciones comerciales multilaterales que se realizan en el seno del GATT aún pueden tener éxito, y son conocidas las limitaciones del pesimismo exportador en cuanto a que subestima la capacidad de empresas y países de superar barreras y aprovechar «ventanas de oportunidad» que permiten ingresar a estadios más altos de desarrollo. Por consiguiente, quizás habría que identificar la incertidumbre como el rasgo más importante de la economía internacional en el momento actual.

Ante la importancia de la incertidumbre puede resultar pretensioso evaluar las perspectivas de la economía de América Latina y el Caribe en la década de los 90; por ello resulta más realista considerar solamente algunos problemas centrales y posibles oportunidades. Junto con la incertidumbre puede esperarse una creciente especialización internacional de los países latinoamericanos y caribeños que, una vez lograda la estabilización, se base en un aprovechamiento de aptitudes tecnológicas y de infraestructura, así como en diversas disponibilidades de recursos naturales y de mano de obra. Así, frente a un entorno externo similar y con una creciente convergencia de políticas económicas, puede preverse que las diferencias y semejanzas de las perspectivas de los países de América Latina en la década de los 90 dependerán en mayor grado que en el pasado reciente de las condiciones internas de cada país. En la década recién pasada el peso de la deuda y el deterioro de los términos de intercambio contribuyeron a proyectar una visión aparentemente homogénea o similar de crisis regional; en el futuro la capacidad de cada país de salir

de la crisis será la base de la creciente heterogeneidad de la evolución económica de América Latina y el Caribe.

Referencias

*CEPAL, TRANSFORMACION PRODUCTIVA CON EQUIDAD. - Santiago de Chile. 1990; Treinta años de integración en América Latina: un examen crítico.

*Rosenthal, Gert, NUEVA SOCIEDAD. 113. p5-6 - 1991;

*CEPAL, EL DESARROLLO SUSTENTABLE: TRANSFORMACION PRODUCTIVA, EQUIDAD Y MEDIO AMBIENTE. - Santiago de Chile. 1991;

*Wolfe, Marshall, THE PROSPECT FOR EQUITY. - Santiago, Chile. 1991.